

ECONOMÍA / POLÍTICA

PACTO DE ERC Y PSC PARA UN CONCIERTO ECONÓMICO

Inspectores de Hacienda: el pacto “revienta la solidaridad fiscal” y “aumentará el fraude”

LAS CONSECUENCIAS DEL ACUERDO/ Inspectores, técnicos, economistas y expertos en financiación autonómica alertan del riesgo de trocear la Agencia Tributaria y de romper la caja común en favor de Cataluña como recoge el preacuerdo entre PSC y ERC.

Juande Portillo. Madrid
 La cesión a la Agencia Tributaria catalana del 100% de los impuestos cobrados en Cataluña a cambio de una suerte de cupo al Estado, al estilo vasco, que el PSC ha acordado con ERC para que apoye la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat ha soliviantado a los Inspectores de Hacienda, que alertan de que el pacto “revienta la solidaridad fiscal” y dificultará la lucha contra el fraude tributario. No es el único colectivo inquieto. Técnicos, economistas y expertos en financiación autonómica alertan del riesgo de trocear la Agencia Tributaria y de romper la caja común en favor de Cataluña.

Es “la ruptura total del sistema” de financiación autonómica de régimen común, “una auténtica barbaridad” y “una verdadera vergüenza”, proclamó la asociación profesional del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), manifestando que con este acuerdo “Sánchez revienta la solidaridad fiscal y entrega a ERC su Hacienda” en Cataluña. “Este supuesto concierto no está recogido en la Constitución, como si lo están el vasco y el nava-

ro”, recordaban los inspectores, agregando que “entre los principios constitucionales del sistema tributario español está el de igualdad y no confiscatoriedad (artículo 31.1)”. “Si a los españoles se les roban impuestos generados en toda España se están contraviniendo estos dos principios”, sostuvo la asociación que preside Ana de la Herrán.

El acuerdo, cuyas 25 páginas fueron difundidas ayer, fue anticipado la noche del lunes por la portavoz de ERC, Raquel Sans, que explicó que supondrá que Cataluña se ocupe de la “gestión, recaudación, liquidación e inspección” del 100% de los impuestos cobrados en la región, incluyendo IRPF, Sociedades e IVA. El primer paso, desveló, será la gestión de la Campaña de la Renta de 2025, en primavera de 2026.

El texto, que las bases de ERC votarán el viernes, recibió ayer el respaldo de la ejecutiva del PSOE y fue bendecido como “un buen acuerdo para Cataluña y España” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sostuvo que “lo importante no es quién gestiona los impuestos, sino qué se hace con ellos” y garantizó “la igualdad entre



La vicepresidenta y el presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Laura Vilagrà, y Pere Aragonès (ERC), respectivamente, ayer.

españoles se viva donde se viva”. Fuentes del Ministerio de Hacienda se limitaron a apostillar que el acuerdo “garantiza la solidaridad interterritorial y la prestación de servicios en toda España”, pero no explicaron cómo.

En este marco, los inspectores de Hacienda mostraron su “rechazo frontal y absoluto” al preacuerdo de “inde-

pendencia fiscal” para Cataluña. “No es más que un modelo de financiación a la carta para Cataluña, bajo el falaz reconocimiento de una singularidad histórica que lo que pretende es romper con los principios establecidos en nuestra Constitución”, expusieron en un comunicado, alertando de que “la puesta en marcha de esta barbarie implicará conse-

cuencias terribles para todos los españoles y entre ellos, y de forma especial, para quienes residen en Cataluña”. “La coordinación del sistema tributario se rompería con el consiguiente aumento del fraude fiscal, el coste para todos los ciudadanos también se vería incrementado, innecesaria e ineficazmente y, por supuesto, la gran mayoría de

los servicios públicos que recibe la sociedad se verían gravemente dificultados, afectando fundamentalmente a quienes menos recursos tienen”, ilustran los inspectores, advirtiendo del “menoscabo de la seguridad jurídica para el tejido empresarial español y para los contribuyentes”.

IHE anunció que “pedirá responsabilidades por ese destroz del sistema tributario y de la Agencia Tributaria al Gobierno”, en particular “a la ministra de Hacienda quien lleva meses diciendo que no iba a existir un concierto económico con Cataluña”, recordaron, advirtiendo de que se disponen a “utilizar todos los medios legales oportunos para impedir que esta situación siga adelante, velando, especialmente, por los compañeros” destinados en Cataluña.

Se trata de 5.000 funcionarios, informaron desde la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, donde coinciden en que el pacto “podría ir contra la Constitución y la solidaridad entre territorios”.

“Hay que tener mucho cuidado con eso de trocear las agencias tributarias”, advirtió

> Pasa a pág. siguiente

Clamor contra el acuerdo de barones del PSOE, socios del Gobierno, CCAA y oposición

J. Portillo. Madrid
 Pocos acuerdos políticos suscitan un rechazo tan generalizado y transversal como el del “concierto económico”, que sacaría a Cataluña del régimen común de financiación autonómica cediéndole el 100% de impuestos a cambio de un cupo al Estado, que han pactado PSC y ERC para sellar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Desde barones del PSOE a socios del Gobierno, pasando por comunidades autónomas y la oposición clamaron ayer contra el pacto.

El primero en reaccionar a la contra fue el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano-García Page, que se mostró “perplejo” ante el “grave atentado a la igualdad anunciado por ERC” y el “atronador silencio” del PSOE, dijo, horas antes de recurrir la ley de amnistía del proceso. En la misma línea se manifestó Javier Lambán, expresidente de Aragón y líder socialista en la región, que consideró “inadmisible” un pacto que supone “una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles”. Le se-

condió el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que alertó del riesgo de “fallar al conjunto de los españoles”.

Pese a sus críticas, la ejecutiva federal del PSOE avaló el acuerdo y la ministra portavoz, Pilar Alegria, restó peso a sus críticas, celebrando el “triumfo de la política”.

Sin embargo, el cumplimiento del pacto exige reformas legales, como la de la ley de financiación autonómica, que requieren de mayoría absoluta en el Congreso. Un hito que se complica ante las re-

ticencias de socios habituales del Gobierno y miembros del partido minoritario de la coalición. “Si en el Congreso se abre la posibilidad de reformar la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas [LOFCA], para que dicha reforma tenga el apoyo de Compromis se tendrían que abordar las problemáticas concretas que tenemos los territorios infrananciados, concretamente Valencia”, advirtió Águeda Micó, portavoz en el Congreso de Compromis, formación ligada a Sumar. La Chunta

Aragonesista, integrada en Sumar, así como Aragón-Teruel Existe, directamente anticiparon que votarán en contra.

Por su parte, los gobiernos autonómicos del PP anunciaron que plantarán “batalla judicial” en contra del acuerdo de financiación singular para Cataluña, que prevén recurrir ante el Tribunal Constitucional. Cargaron duramente contra el pacto el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el de Andalucía, Juanma Moreno; de la Xunta de Galicia, Alfon-

Page y Lambán afean un pacto que el PP ve inaplicable y que requiere a la mayoría del Congreso

so Rueda; Murcia, Fernando López Miras; las de Extremadura, María Guardiola; Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; o Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que consideró que el pacto “rompe la caja común” y llamó a la movilización.

“Es un ejercicio claro de corrupción política y económica”, manifestó por su parte el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que consideró que “el acuerdo es imposible de cumplir” y acusó a los socialistas de “engañar” a ERC como ya hicieron antes con Junts.

Sánchez ve positivo para España el pacto y asegura “igualdad entre españoles, vivan donde vivan”

< Viene de pág. anterior

por su parte Valentin Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), subrayando su papel clave en la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación, cuya gestión puede hacer “que un mismo impuesto recaude mucho en un territorio y nada en el de al lado”. El economista es partidario de que la Agencia Tributaria central comparta más datos con las autonomías, pero se muestra preocupado por los problemas de descoordinación que puedan surgir en plena reactivación de las reglas fiscales y ante las tensiones de gasto que supondrán los compromisos globales en Defensa o la jubilación de la generación del *baby boom*.

Más allá, sacar a Cataluña del régimen fiscal común -del que es la única región que realiza aportaciones netas junto a Madrid y Baleares, puesto que el resto son meras beneficiarias- para equipararse en la práctica con los territorios forales de País Vasco y Navarra pone en jaque todo el modelo de financiación autonómica. “La foto está clara: quieren quedarse con todo lo posible del excedente fiscal que se genera en su territorio y con los instrumentos recaudatorios, tener ellos el dinero, hasta donde les dejemos llegar”, valora Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Más allá, el experto considera el texto “muy flojo y poco detallado”, un “brindis al sol” que “no detalla cómo se van a calcular el cupo, ni la aportación de solidaridad, ni cómo funcionaría la transición”. La “única tranquilidad”, repone, es la dificultad que tendrá la reforma de salir adelante teniendo en cuenta que requiere una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Por su parte, Empresaris de Cataluña criticó que el acuerdo “no ayuda a las empresas ni a la economía”, solo supone “exclusión”, “conflicto” y “romper el principio de solidaridad entre españoles”.